

Casavantes tiene sus derechos expeditos para hacer valer el denunció que hace de otros baldíos que se hallan comprendidos dentro de los linderos de la hacienda de San Miguel de Horcasitas.

Interpuesta apelación, y después de muchas y prolijas diligencias, el tribunal de circuito de Durango, confirmó el fallo de 1ª instancia, libró la ejecutoria respectiva y remitió los autos á esta superioridad para su revisión.

Como el fallo está ejecutoriado y como en los procedimientos, aunque prolijos y algo inconducentes, no hay infracción de ley, el Procurador general pide se dé por revisado el proceso.

México, Noviembre siete de mil ochocientos setenta y uno.—*L. Guzman.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre diez de mil ochocientos setenta y uno.

De conformidad con lo pedido por el C. Procurador general de la nación se han por revisados estos autos, y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvase, con copia certificada de este auto para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Noviembre quince de mil ochocientos setenta y uno.—*F. Guzman.*

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Tlaxcala por el C. Lic. José Dominguez, contra la orden de prision dada por el jefe político de Huamantla por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El promotor dice: que el C. Lic. José Dominguez, interpuso ante este juzgado el recurso de amparo contra la orden de aprehension que el C. prefecto político de Huamantla dictó respecto de aquel, á petición del C. alcalde 1º del mismo lugar, por creer violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 16 y 17 de nuestra carta fundamental, y pidió se suspendiese desde luego la ejecución del acto reclamado considerando el caso como de urgencia notoria, en atención á que su esposa se encuentra enferma, y de no suspenderse dicha ejecución, quedaria privada del único que podria ministrarle los auxilios necesarios y que ademas sus intereses quedarian abandonados y á merced de los abusos de sus dependientes. Este juzgado, en atención á las causales expuestas decretó, con fecha dos del corriente, se librase la orden de suspensión solicitada y se pidiese informe justificado al mencionado jefe político de Huamantla, quien al rendirlo expone haber mandado aprehender al C. Dominguez en virtud de un oficio que recibió del C. alcalde 1º de esa ciudad cuyo oficio inserto y en él aparece que con motivo de un juicio seguido en el juzgado 1º local, por violacion de depósito contra el quejoso, se proveyó un auto recomendándose á la prefectura su aprehension.

Dos son los hechos en que funda su recurso el quejoso.

Primero; no haberse motivado ni fundado la causa legal del procedimiento, y

Segundo; tener este por origen una deuda de carácter puramente civil.

En cuanto al primero, el art. 16 de la Constitucion general de la República determina: *“que nadie puede ser molestado en su persona, familia, etc., sin mandamiento escrito, motivando la causa del procedimiento,”* y en el caso que nos ocupa no se han llenado estos requisitos, pues aunque el C. prefecto manifestó haber obrado en virtud de lo decretado por el alcalde, no motivó en su orden de aprehension que tengo á la vista, la que fué presentada por el quejoso y corre en autos, la causa legal del procedimiento.

Podria objetarse que diariamente se ven casos en que las autoridades políticas obran de la misma manera; pero tales hechos aun cuando hayan tenido lugar, solo deben considerarse una práctica abusiva que jamas podrá justificar y como contraria á la Constitucion.

Por lo que toca al segundo punto, el quejoso funda su pretension en que, el procedimiento tiene por origen una deuda de carácter puramente civil, apareciendo por el oficio que el C. alcalde 1º mandó al prefecto y este trascribió en su informe, que se sigue un juicio criminal contra el C. Dominguez por violacion de depósito y no un juicio civil como dice el quejoso, y siendo esto así, el que suscribe, sin meterse á la calificacion de la justicia ó injusticia del auto, cree que el C. alcalde ha obrado bien y en el círculo de sus atribuciones que le marca la ley de administracion de justicia del Estado, y por lo mismo no ha violado la garantía que otorga la Constitucion en su art. 17.

Por todo lo expuesto, el promotor concluye pidiendo que el juzgado se sirva fallar, que la justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. José Dominguez, contra la orden de prision dictada por el C. prefecto político de Huamantla, por haberse violado por ella las garantías que otorga el art. 16 de nuestra carta fundamental, y que la justicia de la Union no ampara ni protege al quejoso en cuanto á la garantía

del art. 17 que cree violado por el C. alcalde de Huamantla, por no haber violacion alguna.

Ademas pide, que el quejoso reponga esta foja con la del sello correspondiente.

Tlaxcala, Octubre ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*José Cirilo Alba.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Tlaxcala, Octubre veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Lic. José Dominguez, á consecuencia de la orden de prision librada en su contra por el C. prefecto político de la ciudad de Huamantla Juarez: visto el auto en que se decretó la suspension del acto reclamado; el informe con justificacion rendido por la autoridad inmediata ejecutoria del acto; lo pedido por el ministerio público; la prueba rendida por el actor; la citacion para sentencia y todo lo demas que de autos consta y tener presente convino.

Considerando: que este juzgado al decretar la suspension del acto reclamado, tuvo presente para ello las razones en que fundó el auto respectivo: que dichas razones son fundadas y justas en concepto del que suscribe, pues que es fuera de duda, que reducido á prision el quejoso y próxima á su alumbramiento su consorte, ésta carecia de los auxilios que en tan graves circunstancias pudiera proporcionarle su esposo, particularmente residiendo en una finca de campo, en donde los recursos son mas escasos: que tambien los intereses del actor hubieran podido padecer grandes trastornos, á causa de la ausencia del único que podia vigilar y cuidar de ellos: que pidiendo el informe prevenido en el art. 5º de la ley de 20 de Enero de 1869, y habiendo una distancia de diez leguas de esta ciudad á la de Huamantla, el quejoso, entre tanto se producía dicho informe y

evacuaba el traslado respectivo el C. promotor fiscal, no podia atender á su esposa en su enfermedad ni á sus intereses, porque no estando librada la orden de suspension, era evidente que permaneciendo en su finca, habria sido reducido á prision, y residendo mientras en otro punto, subsistia el inconveniente de dejar abandonados sus intereses y familia, todo lo cual, funda bien, en concepto del juez que suscribe, la urgencia del caso: que no estando motivada la causa de la prision en la orden que corre agregada al expediente, era preciso darle entrada al recurso de amparo, para que durante la sustanciacion del juicio se esclarecieran los hechos y se pudiera juzgar en pleno conocimiento de causa: que aunque la autoridad política de Huamantla al rendir su informe justificado, trascribió en él la comunicacion del juzgado 1º local de dicha ciudad que expresaba la causa de la prision decretada contra el quejoso, ya cuando esto sucedió, estaba librada la orden respectiva para la suspension del acto reclamado, y en consecuencia no era posible revocar dicha orden, sino que era indispensable continuar y proseguir el juicio, hasta pronunciar en él sentencia definitiva.

Considerando: que mandado abrir á prueba el negocio, el actor rindió la que consta á fojas 12, frente y vuelta del expediente: que dicha prueba que consiste en la confesion judicial del C. alcalde 1º de Huamantla, tiene todos los requisitos que las leyes exigen para su validéz, porque el que el que la hizo es mayor de veinticinco años; la hizo con ciencia cierta; fué hecha contra el confesante y ante juez competente; estuvo presente la parte contraria; fué sobre hechos determinados, y no se hizo contra la naturaleza ni contra la ley: que teniendo la expresada confesion los requisitos necesarios para ser válida, solo falta examinar si con ella probó el actor su intencion, es decir si justificó legal y plenamente que se le queria reducir á prision por una deuda de un carácter puramente

civil: que esto es fuera de duda, porque habiendo confesado el C. alcalde 1º de Huamantla que el origen de la demanda fué de carácter civil; que el quejoso por mas de seis dias tuvo en el juzgado en depósito voluntario y á disposicion del acreedor Demetrio Maravez la suerte principal importante ciento ochenta y ocho pesos sesenta y nueve centavos, cuya cantidad se rehusó recibir el expresado acreedor, si el quejoso no entregaba en el acto de notificársele, la cantidad de treinta pesos, que segun el expresado acreedor importaban los perjuicios: que en esta virtud, el demandado y actor en este juicio, pidió que se le devolviesen los ciento ochenta y ocho pesos sesenta y nueve centavos, supuesto que no queria recibirlos la parte que los demandaba; que á esta solicitud se accedió previa consulta de asesor; que la devolucion se hizo sin restriccion ni condicion alguna; que despues, cuando se le exigió al quejoso retuviese en clase de depósito y como diligencia precautoria el dinero en su poder, este se opuso alegando, que dicho dinero lo habia recibido no en calidad de depósito ni por diligencia precautoria, sino lisa y llanamente, y que en consecuencia no se creia obligado á conservarlo con el carácter que se lo exigia, y finalmente: que despues de todos estos acontecimientos se dió la orden de prision contra el quejoso, todo esto está probando de una manera clara y evidente que en la persona del C. Lic. José Dominguez se han violado las garantías que á todo C. concede la Constitucion general de la República en sus artículos 16 y 17, y ademas que es absolutamente infundado el dicho del C. alcalde 1º de Huamantla en su queja elevada al tribunal superior de justicia del Estado, de que en el presente caso no debia darse entrada al recurso de amparo, por no ser este procedente en negocios judiciales segun lo prevenido en el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869; pero es de advertir, que la cita del expresado art. no tiene aplicacion en el caso de que se trata:

ya porque al principio del presente juicio el amparo solo fué pedido contra los actos del gefe político de Huamantla, quien carece de atribuciones judiciales, ya porque aunque despues se hiciera extensivo á los del alcalde del mismo lugar ejerciendo aquellas facultades, era tambien procedente contra sus actos el mismo recurso, segun la fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero citada; y principalmente porque la sentencia relativa nada podia decidir acerca de los derechos que el quejoso ó su contrario tongan en el juicio que originó el presente, ó conceder el amparo por los resultados de una sentencia judicial, que es la genuina inteligencia del art. 8º que se cita, sino que la de este tribunal solo ha de reducirse á resolver: si con los actos ejercidos por los CC. gefe político y alcalde de Huamantla para poner en prision al C. Dominguez, habria ó no violacion de garantías: que está justificado la hubo y no existe prueba alguna de que por parte del quejoso hayo habido violacion de depósito, pues que si bien es cierto que el C. Lic. José Dominguez se negó á tener en clase de deposito la cantidad que legalmente se le habia devuelto, tuvo razon para ello, toda vez que segun ha justificado plenamente, la devolucion del dinero no se le hizo con condicion de ningun género, y en consecuencia malamente se puede juzgar por violacion de depósito á la persona en quien nada se ha depositado: que no habiendo dicha violacion y habiéndose decretado la prision contra el quejoso despues de algunos hechos de un carácter puramente civil, es claro que se han violado en su persona las garantías que concede la carta fundamental de la República, y siendo por otra parte cierto que violadas aquellas, procede el amparo, por lo expuesto y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion general de la República, el juez que suscribe definitivamente juzgando falla:

Primero; la justicia de la Union ampa-

ra y protege al C. Lic. José Dominguez contra la orden de prision librada por la autoridad política de Huamantla, á peticion del juzgado 1º local de dicha ciudad.

Segundo; remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para la revision de este fallo, y copia de él al periódico oficial del gobierno de la República, así como á la redaccion del Semanario Judicial para su publicacion, de conformidad con lo prevenido en las leyes respectivas. Hágase saber. Así definitivamente juzgando lo decretó mandó y firmó el C. Lic. Lázaro Mª Limon juez de Distrito en este Estado, por ante mí. Doy fé.—Lic. Lázaro Mª Limon.—José Mariano Paredes.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Tlaxcala, por el C. Lic. José Q. Dominguez, contra el gefe político de Huamantla, y contra el juez primero local del mismo lugar; y

Considerando: que la orden de prision expedida por el gefe político no funda ni motiva la causa legal del procedimiento, lo cual importa la violacion de la garantía á que se refiere el art. 16 de la constitucion federal: que segun aparece en el expediente, el juez primero local de Huamantla dispuso que el gefe político procediera á la prision del Lic. Dominguez, en un negocio puramente civil, lo cual importa la violacion de la garantía á que se refiere el art. 17 de la misma constitucion federal, se decreta: Que se confirma la sentencia pronunciada el 28 del próximo pasado, por el juzgado de Distrito de Tlaxcala, que declara: que la justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. José Dominguez contra la orden de prision librada por la au-

toridad política de Huamantla, á petición del juzgado primero local de dicha ciudad.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordáz.*—*Ygnacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, once de Noviembre de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por los CC. Adrian y José C. Valadez, contra los procedimientos de la prefectura del Distrito de Mazatlan, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Lo que el que suscribe pidió, fué que se pidiera informe, no al C. prefecto, quien ya habia declinado su responsabilidad; sino al C. juez de lo criminal, para que si en efecto habia méritos para proceder contra los solicitantes, no se atendiera á su petición; mas puesto que el juzgado no defirió á lo que promoví, tal vez por que los CC. Valadez se quejan de los procedimientos del prefecto y no de los del juez de lo criminal, no estando bastantemente justificados aquellos, debe concederse amparo.

Mazatlan Octubre nueve de mil ochocientos setenta y uno.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan Octubre catorce de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: los CC. José C. y Adrian Valadez promovieron juicio de amparo contra la providencia que el C. prefecto del Distrito dictó para que fuesen presos y puestos á disposicion del juzgado de lo criminal de este partido, á fin de que se les juzgase despues de que la misma autoridad política los juzgó y sentenció por riña, exponiendo que con tal providencia se viola en sus personas la garantía otorgada en el artículo 24 de la constitucion federal, en la parte que previene, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, y aunque en el mismo ocuso pidieron la suspension de los efectos de aquella, previos los trámites legales, se resolvió no haber lugar y que continuaron los del juicio, pidiéndose para esto el correspondiente informe al C. prefecto; rendido éste sin justificacion alguna, y sin agregar mas al que dió para resolver el incidente sobre suspension, se pasaron los autos al C. promotor fiscal, cuyo empleado pidió se decretase el amparo: con esto y por no juzgarse necesaria prueba alguna, se dió por concluida la tramitacion, quedando citadas las partes para sentencia.

Considerando: que los Sres. Valadez hacen consistir la violacion de que se quejan, en el hecho de que habiendo sido condenados al pago de la multa que satisficieron por la riña en la que el dia anterior habian tenido parte, ya se les debe estimar como juzgados, y por consiguiente no debió el prefecto ordenar la consignacion de ellos al juez de lo criminal para que lo fuesen por segunda vez, sin quebrantar el citado artículo constitucional; esta aseveracion no es de apreciarse en los términos que se pretende, porque el prefecto, al informarse de la